

Argentina: De la insurrección popular al “capitalismo normal”

Por James Petras

Rebelión

Abril de 2004

Traducido para Rebelión por Felisa Sastre

Introducción

Entre los días 19 y 21 de diciembre de 2001, una revuelta popular masiva echó del poder al presidente De la Rúa en medio de los enfrentamientos callejeros más importantes de la reciente historia argentina, que produjeron un enorme número de víctimas entre los manifestantes (38 de los cuales fueron asesinados). Enormes manifestaciones con barricadas en las calles se sucedieron en todo el país, en una alianza sin precedentes entre parados, trabajadores subempleados y un sector importante de la clase media que se había visto despojada de sus ahorros. Tres diputados, que aspiraban a suceder a De la Rúa, fueron obligados a dimitir rápidamente. Desde diciembre de 2001 a julio de 2002, los emergentes movimientos populares constituyeron un poder en las calles- con una presencia visible en todas las provincias-, que se plasmó en el corte de las autopistas y de los bulevares más importantes de Buenos Aires y de las capitales de provincia. De un total de población activa de 30 millones (el total de la población argentina es de 38 millones), se estima que más de 4 millones de personas participaron en las manifestaciones. Muchos autores de los dos extremos del espectro político hablaron de “una situación pre-revolucionaria”, y de la existencia de un “poder dual”: el de los piqueteros , asambleas de barrio y fábricas ocupadas, por una parte, y el del aparato del Estado por la otra. No cabe la menor duda de que las principales instituciones del Estado (el poder judicial, la policía y las fuerzas armadas), los partidos políticos tradicionales y el Congreso perdieron su legitimidad ante la mayoría de los argentinos durante los acontecimientos que condujeron a la insurrección de diciembre de 2001 y a lo sucedido inmediatamente después.

El lema más popular “¡Que se vayan todos!”¹ reflejaba la hostilidad general de la gente hacia los partidos y hacia las principales instituciones políticas. Diecisiete meses después, más del 65 % del electorado votaba a dos candidatos del Partido Justicialista (peronista), entre los que se encontraba Carlos Menem, que había ocupado la presidencia entre 1989-2000, y que era el principal culpable del colapso de la economía y del empobrecimiento de millones de argentinos. Ante la perspectiva de un rotundo fracaso en la segunda vuelta, Menem se retiraba y Néstor Kirchner, con poco más del 21 % del voto, se convertía en Presidente.

Escasamente dos años y medio después de la insurrección popular, el Presidente Kirchner gozaba de un nivel de aceptación del 75 %, del apoyo de las tres principales confederaciones de sindicatos, de las organizaciones de derechos humanos (entre ellas, la de las Madres de la Plaza de Mayo), de un amplio sector de la clase media y de muchas de las organizaciones de piqueteros en paro, a los que habría de sumarse el del FMI (si bien con reservas).

La radical y profunda transformación política planteó una serie de importantes cuestiones teóricas y prácticas sobre la naturaleza de los movimientos populares y de las insurrecciones, tanto en lo referido a sus logros cuanto en lo relativo a sus limitaciones. En términos más concretos, la “transformación política argentina” planteó otras muchas cuestiones relativas al proceso para re-legitimizar a las instituciones políticas que habían quedado desacreditadas por completo; la estrategia política de un régimen neo-liberal en un momento en que existía un amplio rechazo de las fracasadas políticas neoliberales; la “reforma” del Partido Justicialista- consecuencia de la insurrección de diciembre de 2001; la estrategia económica internacional multilateral (ALCA, MERCOSUR, Acuerdo de Libre Comercio con la Unión Europea; relaciones bilaterales con Venezuela, Brasil y China), diseñada para la conquista de mercados para la exportación.

Si bien se produjeron *cambios* políticos significativos, lo fueron en un contexto de continuismo sustancial de las estructuras y de las políticas socio-económicas, que sólo tuvo un leve impacto en la estructura de clases, en el paro, en los salarios y en la pobreza. Por otra parte, los obstáculos más graves para cualquier desarrollo sostenible,

¹N.T. Originalmente en español. (Out with the politicians!)

equitativo y vigoroso, permanecieron intactos: el pago de la deuda externa, la volatilidad del capital, las privatizaciones, los depósitos en el extranjero y la falta de inversión interna y externa en las empresas estratégicas. El asunto principal al que se enfrentaba la “vuelta a la burguesía” de la política argentina estaba implícita en la heterodoxia del régimen- ¿En qué medida y hasta dónde podía la administración de Kirchner llevar a cabo cambios políticos y sociales a la vista de su compromiso con estrategias e instituciones ligadas al pasado? Y específicamente, ¿era viable la visión de Kirchner de un “capitalismo normal” al margen de las imperantes estructuras económicas y políticas neo-liberales? Dejando de lado la vaguedad y ambigüedad del término (¿qué quiere decir “normal?”), ¿existía alguna posibilidad de que Kirchner promoviera una “burguesía nacional” opuesta a las políticas neoliberales y al libre comercio, con un mercado interior limitado y unas infraestructuras y un sector energético que formaban un cuello de botella, resultado de las anteriores políticas de privatización?

Para contestar a estas preguntas procederemos a examinar los cambios y las continuidades que se han producido durante el Régimen de Kirchner. Nuestro propósito es analizar la lógica subyacente y las dinámicas del régimen con el fin de comprender su desarrollo futuro, sus potencialidades y sus limitaciones.

Las transformaciones políticas

El Régimen de Kirchner ha llevado a cabo una importante serie de cambios en las instituciones militares, judiciales y de aplicación de las leyes. En especial, ha sustituido con éxito a la corrupta “mayoría automática” del Tribunal Supremo- nombrada por el Presidente Menem-, por un respetado grupo de juristas. Ha obligado a jubilarse a muchos de los principales generales y jefes de policía con dudosos antecedentes en materia de derechos humanos, muchos de ellos implicados en el contrabando, secuestros y chantajes. Ha llevado a cabo con éxito la ofensiva para revocar la amnistía otorgada por los anteriores presidentes (Alfonsín y Medem) a los generales implicados en los asesinatos masivos de 30.000 argentinos durante los años de la “guerra sucia” (1976-1982). Ha sido muy eficaz al instar del Congreso la erradicación del alto nivel de aceptación de sobornos (de manera especial aquellos que se produjeron en 2001 para la aprobación de las leyes contra el movimiento obrero). Por medio de estas actuaciones,

Kirchner ha dado una nueva legitimidad parcial a las instituciones públicas, al menos al dotarlas de una apariencia de honradez, responsabilidad y sensibilidad hacia los derechos humanos. De la misma forma, han sido importantes los cambios en la forma y en el fondo con los que ha re-legitimado la Presidencia en cuanto interlocutor válido para ciertos sectores de los movimientos populares, de los grupos de derechos humanos, sindicatos e instituciones financieras internacionales. Como consecuencia de ello, Kirchner, en marzo de 2004, disfrutaba de un alto índice de popularidad en su segundo año de régimen. No obstante, esos importantes cambios no han afectado de forma relevante a la naturaleza de las instituciones públicas ni a la honradez de la clase política.

La “reforma” militar es un ejemplo. Si bien algunos de los oficiales de más alto grado en el escalafón han sido jubilados, la mayoría de los que han ocupado sus puestos pertenecen a la misma escuela de políticos autoritarios, y son profundamente contrarios a llevar de nuevo ante los tribunales a los generales genocidas. Esto se ha hecho evidente durante la visita de Kirchner a la ESMA, la antigua Academia Naval, convertida en museo en homenaje a las víctimas del terrorismo de los militares. Lo mismo ha ocurrido con la judicatura y la policía: se han producido cambios en las cúpulas pero no en las “normas” y en el contexto en que operan los funcionarios. Muchos de los jueces todavía pertenecen al antiguo régimen y la policía todavía se halla implicada en actuaciones corruptas y violentas. La parcial “limpieza de la casa” no ha sido un proceso continuado, y se mantienen las condiciones para que, una vez que cambien las circunstancias y ceda la presión de las masas, se pueda reproducir el viejo sistema.

La derogación de la amnistía no ha conducido de inmediato al juicio de los oficiales del ejército que llevaron a cabo el genocidio. Observadores de los derechos humanos afirman que, con anterioridad a los juicios, habrá un largo proceso, en parte debido a que un importante sector de peronistas partidarios de Menem son destacados gobernadores de varios Estados, y diputados que se oponen a los tribunales de derechos humanos. Aunque Kirchner ha llevado a cabo cambios significativos en la cumbre, no ha modificado las alianzas estructurales existentes entre las instituciones políticas, su propio partido- el peronismo- y las elites económicas neoliberales del interior y del extranjero que continúan controlando la economía.

Kirchner ha efectuado algunos cambios de política para debilitar a las elites autoritarias tradicionales. El Presidente intervino en Santiago de Estero para remover al mafioso gobernador cuya familia había gobernado con puño de hierro durante más de medio siglo. De acuerdo con su propósito de constituir su propia base política independiente- en oposición al sector peronista de ultra derecha - Kirchner ha promovido lo que denomina “alianzas transversales”: coaliciones que van más allá de los partidos y movimientos sociales existentes. Aunque todavía depende en gran medida de los gobernadores peronistas, el proyecto de Kirchner prevé la constitución de un partido nuevo de centro-izquierda, fundamentado en la vuelta a la política nacional-populista del peronismo de la primera época, pero con menos corrupción y represión.

Durante el primer año en el poder, el régimen de Kirchner fue, a grandes rasgos, tolerante hacia la actividad de los piqueteros- que incluía el corte de calles- evitando los enfrentamientos violentos que podrían restarle partidarios entre los grupos defensores de los derechos humanos, y provocar nuevas protestas masivas. Si bien el régimen de Kirchner, inicialmente, respetó el derecho democrático de protesta de los piqueteros, se negó a anular los juicios políticos contra 4.000 activistas detenidos por el régimen anterior. Es más, sus aliados políticos en provincias continuaron con la represión salvaje de las protestas masivas, encarcelando e hiriendo a mucha gente en San Luis, Santiago de Estero, Salta y Jujuy. Peor aún, el Ministro del Interior de Kirchner prometió cumplir las sentencias de un tribunal en abril de 2004, en las que se culpaba a los piqueteros por cortar calles, una decisión que unió a la totalidad del movimiento piquetero en una masiva protesta que tuvo lugar en mayo de 2004. El primer año de Kirchner en el Gobierno se ha basado en una evaluación realista de su precaria situación, de lo reciente de la insurrección del diciembre de 2001 y de la necesidad de transformar su amplia popularidad en una organizada y “orgánica” base en la que apoyarse. Kirchner ha actuado con gran astucia a este respecto, al equilibrar su política económica liberal con medidas sobre los derechos humanos y la ampliación, aunque mínima, de políticas de bienestar social. Ha cumplido con la mayoría de los compromisos del FMI pero ha rechazado aumentar el superávit presupuestario y el pago a los poseedores privados de bonos del Estado - manteniendo a raya de esta manera a las instituciones financieras internacionales mientras daba la imagen de ser independiente del FMI. Ha procedido a satisfacer simbólicamente muchas de las reivindicaciones de los grupos de derechos

humanos en relación con violaciones ocurridas en el pasado, sin provocar a los oficiales en activo del ejército. No ha dado marcha atrás en las privatizaciones pero congeló temporalmente los precios de la energía, electricidad y otros servicios públicos, una política que posteriormente ha revocado. Kirchner ha mantenido la mayoría de los contratos de trabajo de subsistencia pero no ha subido los salarios más allá de los 50 \$ mensuales y ha dado de baja a más de 20.000 beneficiarios a quienes el régimen consideró que no reunían las condiciones a pesar de las protestas de algunas organizaciones de piqueteros.

El más ambicioso programa social de Kirchner realizado con éxito ha sido el puesto en marcha en el sector farmacéutico: El Gobierno garantizó la provisión pública de medicamentos, con un 90 % de descuento, en los centros primarios de salud para las familias de ingresos más bajos –que agrupan a 15 millones de personas. Además, el gobierno se propone facilitar medicación anti-viral para los enfermos de SIDA. El Ministro de Salud, Ginés González García, afirma que la nueva Ley de Prescripción de Genéricos afecta al 82 % de las medicinas que se prescriben en Argentina- lo que permite a 4 millones de argentinos el acceso a medicamentos que no estaban al alcance de su poder adquisitivo.

Dado el alto nivel de terrible corrupción en el aparato del Estado, Kirchner se ha visto obligado a realizar cambios entre los funcionarios con el fin de disponer de un instrumento político para proseguir con la “normalización” del desarrollo capitalista. Por ejemplo, la connivencia existente entre los altos mandos policiales con la delincuencia, y el hecho de que la policía criminal estuviera implicada en la extorsión generalizada, en el chantaje y en los secuestros de hombres de negocios, imposibilitaba ofrecer seguridad a los inversores y a las nuevas inversiones. Mientras el Tribunal Supremo estuvo controlado por jueces corruptos, dispuestos a complacer al ex presidente Menem, siempre se cernía la amenaza de que cualquier cambio pudiera considerarse “inconstitucional”. La clave de la reforma política, judicial y militar de Kirchner se basaba en su deseo de establecer un Estado a imagen del “capitalismo normal” sin desmontar su carácter capitalista e incluso “neo-liberal”. Sin lugar a dudas, algunos cambios han sido positivos, pero también es cierto que, si el capitalismo argentino entra en crisis de nuevo, incluso esas instituciones “reformadas” del Estado pueden servir para reprimir y bloquear los cambios necesarios.

El rendimiento económico y las condiciones sociales.

La recuperación en marcha de la economía en Argentina refleja los profundos prejuicios de clase existentes en el régimen de Kichner. El comercio exterior, basado en las exportaciones agrícolas y de minerales, han tenido un gran auge pero con escasa o nula repercusión en la redistribución de la riqueza. Se han llevado a cabo negociaciones comerciales sobre el ALCA, y se han hecho públicos algunas discrepancias que afectan principalmente a las exportaciones agrícolas argentinas pero no a las que alteran los intereses sociales del trabajo o el medio ambiente.

Entre marzo de 2002 y enero de 2004, la producción industrial creció un 33 %. El crecimiento económico en 2003 fue del 8.7 %. Según las estadísticas oficiales, el paro descendió un 5.9 %, desde el 21.5 % al 16.3 %. Previsiones iniciales, basadas en el periodo enero a marzo de 2004, indican que el PNB puede continuar creciendo con una tasa similar durante la mayor parte del año, salvo que la escasez de energía reduzca el crecimiento. En gran medida, este crecimiento se ha basado en las favorables circunstancias internas y externas más que en cualquier cambio estructural. La mayoría de los productos argentinos agrícolas y minerales para la exportación alcanzaron precios casi récord durante el año 2003 y hasta mediados de marzo de 2004- el petróleo, la carne, los cereales, la soja lograron unos precios máximos que produjeron un superávit de más del 5 % del PNB. Este crecimiento facilitó al régimen de Kirchner satisfacer al FMI con el 3 %, y financiar la recuperación económica y los planes de empleo (a diferencia de lo ocurrido en Brasil, donde el régimen de Da Silva destinó el 4,5 % del superávit a pagar a los acreedores, a costa de la economía local y de los parados).

En gran parte, la imagen de progresismo económico de Kirchner es producto del *contexto* en el que se ha desenvuelto más que del fondo de sus políticas. Habida cuenta de la política ultra-liberal que se sigue en la actualidad en Brasil, Méjico, Uruguay, Perú, Ecuador, Chile y en otros países, y dadas las políticas devastadoramente destructivas llevadas a cabo por sus predecesores, es comprensible que muchos periodistas, intelectuales de izquierda, activistas de derechos humanos y otros, perciban como progresista la visión que Kirchner tiene sobre el “capitalismo normal”. Si a ello se añaden los ataques de la ultra-derecha en Argentina (ciertos sectores del ejército, el

periódico *La Nación*, los especuladores financieros y los gobernadores de provincias vinculados a Menem) y de sectores de las Instituciones Financieras Internacionales del exterior, es plausible argumentar que, frente a ellos, Kirchner es “progresista”, pero *sólo* en un sentido muy limitado, en el tiempo y en el espacio.

El crecimiento general del sector de la exportación se debe en gran parte a la devaluación, a la gran demanda de materias primas argentinas y al bajo nivel de partida para medir la reciente recuperación. Entre 2001 (el año del colapso económico) y 2003, las exportaciones de Argentina crecieron entre el 11 y el 124 por cien, según el sector- el mayor crecimiento se produjo en las materias primas agrícolas y en el petróleo que no requerían nuevas inversiones. La devaluación estimuló, asimismo, el crecimiento de las industrias locales porque la importación de productos manufacturados se hizo demasiado cara. El resultado neto fue un significativo superávit de la balanza comercial. Lo mismo ha ocurrido en 2004: en los dos primeros meses, Argentina ha obtenido 1.700 millones de dólares de superávit . El *boom* de las exportaciones argentinas, en gran medida, ha repercutido en la recuperación económica porque el mercado interior todavía está muy deprimido.

El crecimiento de las exportaciones, por diversas razones, no ha afectado a la mayoría de los argentinos. El aumento de las exportaciones exige una capitalización intensiva pero da empleo a un pequeño número de trabajadores (debido a la mecanización de la agricultura y del petróleo). Los ingresos y beneficios del sector van a un reducido número de capitalistas extranjeros y oligarcas agrícolas locales quienes transfieren un porcentaje sustancial de sus ganancias al exterior, lo que disminuye el llamado “efecto multiplicador” sobre el resto de la economía. La tasa de inflación de aproximadamente un 4 % era engañosa en la medida en que reflejaba los precios de los bienes de equipo duraderos; el precio de la carne y de otros alimentos básicos subieron casi el 20% , lo que perjudicaba a los obreros, funcionarios y parados con salarios congelados.

Para los especuladores argentinos, 2003 fue un año fantástico ya que las acciones subieron más del 100 %. Con el apoyo de las IFIs, los poseedores de bonos extranjeros rechazaron aceptar la reducción del 75 % de sus acciones impagadas por los regímenes anteriores. El sistema financiero mostró cierta recuperación ya que los depósitos aumentaron en un 50 % desde mediados de 2002, aunque más del 90 % lo fueron en

cuentas a corto plazo de no más de 30 días. El capital de los sectores financiero e industrial mostró poca disposición a realizar inversiones importantes a largo plazo, que son las que hubieran permitido un crecimiento sostenido. En su lugar, continuó enviando sus beneficios fuera y en algunos casos retiraron las inversiones. Durante 2003, la afluencia neta de capital fue negativa en 3.800 millones de dólares. Casi todo el crecimiento del 2003 se basó en la activación de reservas no utilizadas hasta entonces, que todavía suponen un grave cuello de botella para la economía. Un obstáculo al crecimiento, que plantea en particular un alto riesgo, lo constituyen los monopolios extranjeros en el sector de la electricidad, el agua, el gas y las telecomunicaciones que no han cumplido con las inversiones previstas en los contratos para la privatización. Como consecuencia de ello, incluso el crecimiento del año 2003 está en peligro ya que los monopolios han ocasionado escasez de gas y de electricidad para aumentar su tasa de beneficios con el incremento de los precios, lo que ha ocasionado la reducción del consumo y de la producción.

El mantenimiento de Kirchner de las estructuras básicas del poder económico está creando serios obstáculos económicos incluso para el crecimiento a medio plazo. Lo peor es que la crisis social se ha agudizado o permanece en la práctica igual que en el pasado.

La continuidad de la crisis social: 2003.

Aunque el producto interior bruto creció en 2003 todavía se encuentra un 11 % por debajo del de 1997. Y aunque la renta *per capita* aumentó un 6 % todavía es un 17 % menor de la de hace siete años. Si bien el desempleo bajó un 5 % todavía es del 16.3 %. Además el número de trabajadores a tiempo parcial ha aumentado desde el 13.8 % de 2002 al 16.6 % en 2003. Si sumamos a los parados los trabajadores a tiempo parcial, el crecimiento neto entre 2002 y 2003 (el año de la “recuperación” económica) es sólo de un casi marginal 2 %. La “recuperación”, en relación con el empleo, no ha tenido un impacto importante en la clase trabajadora. Si restamos los 2 millones de beneficiarios de planes de trabajo a 50 dólares al mes, es evidente que lo peor de la crisis todavía afecta a la mayoría de la clase trabajadora. Los datos relativos a los niveles de salarios, pobreza e indigencia avalan la tesis de que el continuismo de Kirchner en política

económica no ha tenido ningún impacto positivo en los trabajadores y clases asalariadas.

Entre 1997 y 2003 los salarios medios bajaron un 22.4 %. Hubo un constante pero gradual declive hasta 2001, al que siguió una brusca caída del 17 % en 2002. El deterioro de los salarios continuó a lo largo de 2003, cayendo un 0.8 % durante la presidencia de Kirchner porque el crecimiento económico no tuvo repercusión en los trabajadores del sector público cuyos salarios se mantuvieron congelados (hasta mayo de 2004), mientras que en el sector privado los sindicatos apoyaron la política de Kirchner de contención de las reivindicaciones salariales para estimular el crecimiento. La pérdida de poder adquisitivo durante el año 2003, el de la “recuperación económica”, fue incluso mayor si tenemos en cuenta el crecimiento medio de los precios de los productos alimenticios que constituyen la parte más importante del gasto familiar en las clases trabajadoras. Claramente, la recuperación debida a la exportación, el cumplimiento del programa de estabilización del FMI y la vuelta de gran número de especuladores a la Bolsa argentina han supuesto un alto precio para la mayoría de los asalariados argentinos.

Los más llamativos signos de la recuperación de Kirchner, basada en las elites, se encuentran en los datos anuales sobre los niveles de pobreza e indigencia.

Al final del primer año de Kirchner en el poder, más de la mitad de la población argentina vivía todavía por debajo del umbral de la pobreza (51.7 %). A pesar del alto crecimiento, los niveles de pobreza sólo habían bajado un 2.6 % entre 2002 y 2003, frustrando cualquier interpretación de su primer año como “un ejemplo de éxito económico”. Peor todavía, el nivel de indigencia se ha mantenido extraordinariamente alto- 25,2 % en 2003, con un 0,5 % de aumento sobre el de 2002.

La burguesía nacional y las multinacionales de la energía.

La explicación para la relación inversa entre el crecimiento del PIB y el deterioro de los salarios, la pobreza y la indigencia, se encuentra en el comportamiento del Estado y de la burguesía nacional: el Estado, por destinar miles de millones para pagar la deuda de las agencias internacionales de crédito, en lugar de crear puestos de trabajo con

inversión pública; por continuar permitiendo que lucrativas empresas privatizadas como *Repsol Petróleo* transfirieran miles de millones a sus sedes centrales; por no recargar con impuestos los 150.000 millones de dólares que las elites argentinas tienen en el extranjero; por no haber canalizado los ingresos de divisas de las elites del sector agrícola y minero hacia la creación de puestos de trabajo de producción en el interior. En pocas palabras, el compromiso de Kirchner con el modelo neo-liberal centralizado e imperial de sus predecesores no proporciona los instrumentos políticos y económicos, los recursos y capacidades para enfrentarse en profundidad a las estructuras existentes que generan la pobreza, la indigencia y el empeoramiento del nivel de vida.

La “burguesía nacional” ha aprovechado las restricciones a las importaciones para lanzar lo que se puede llamar recuperación económica. Valiéndose de la enorme reserva de parados, el capital argentino ha aumentado la producción mediante la explotación de una mano de obra mal pagada, con horarios de trabajo extenuantes, y ha aumentado el rendimiento sin inversiones significativas nuevas o con la introducción de nuevas tecnologías. En efecto, la recuperación industrial se ha debido a la activación de recursos existentes y no utilizados. Hay pocos indicios de nuevas inversiones industriales a gran escala y a largo plazo. Una vez que este “desarrollo fácil” ha seguido su curso, la “burguesía nacional” de Kirchner no parece interesada en un desarrollo sostenido. Mientras tanto, los sectores estratégicos en manos de empresas extranjeras se han movido con rapidez y fuerza para hacerse con el superávit obtenido con la recuperación. Los acreedores extranjeros y el FMI han exigido un aumento de la valoración de las obligaciones deflactadas. Las privatizadas compañías de gas y electricidad, que obtuvieron exorbitantes beneficios en el periodo 1996-2001, no han cumplido los compromisos de inversión pactados con el Gobierno, lo que ha dado lugar a que, con la recuperación, las industrias y los consumidores del país se enfrenten a una grave crisis energética. En abril de 2004, la Agencia estatal responsable de la regulación del mercado mayorista de la electricidad se vio obligada a reducir el voltaje para evitar grandes apagones inducidos por las principales compañías eléctricas (*Financial Times*, 5 de abril de 2004, p.4). Durante la última semana de marzo, más de 30 industrias se vieron afectadas por cortes de electricidad. Según el *Financial Times*, la crisis energética puede reducir el crecimiento económico en un 2 % en 2004 (*ibid*). El régimen de Kirchner capituló al permitir que las compañías de gas suban los precios hasta un 100 % a lo largo de los próximos 15 meses. Aunque la Presidencia asegura que

las empresas pequeñas y los consumidores domésticos no se verán afectados, es más que probable que las grandes industrias repercutirán los altos costes de la energía en los consumidores con subidas de precios. Pero más importante que la aceptación por parte del Régimen del aumento del precio de la energía es la aceptación del “principio” de elevar las tarifas, y de recompensar el chantaje de las corporaciones. El Régimen de Kirchner ha favorecido la posición de las compañías extranjeras propietarias de las privatizadas petroleras, rechazando las reivindicaciones populares que exigían la renegociación de las desfavorables condiciones en las que se llevó a cabo la privatización.

Las industrias del petróleo y del gas son una de las fuentes principales de divisas de Argentina. Desde su época de gobernador de la provincia de Santa Cruz, Kirchner ha sido un firme partidario y promotor de la privatización de la industria petrolífera y un estrecho aliado de la multinacional española, la Compañía de Petróleo Repsol. Los profundos y estructurales lazos existentes entre el Régimen de Kirchner y las compañías extranjeras propietarias del petróleo plantean, a largo plazo, una triple amenaza para la concepción de Kirchner del “capitalismo normal”. En primer término, las exigencias del sector energético de subida de tarifas para los consumidores (bien sean industriales o domésticos) tendrán, sin duda, un efecto inflacionista, impopular que reducirá el nivel de competitividad de los fabricantes argentinos en los mercados internacionales al aumentar los costes de producción. Más aún, al subir las tarifas, la imagen de Kirchner como “estadista independiente” ha quedado en entredicho. Las duras e inconsecuentes acusaciones formuladas por Kirchner sobre el incumplimiento de los compromisos de inversión de las compañías de energía de capital extranjero desde 1996 son ciertas, pero no han dado lugar a ninguna actuación positiva, ni tan siquiera a investigaciones, que condujeran a una renegociación de los contratos de privatización. En segundo lugar, la “crisis” energética va en contra del deseo de Kirchner de establecer un “capitalismo normal”, basado en la alianza entre los exportadores de productos agrícolas y energéticos y la burguesía industrial del país. La escasez de energía - en el momento en que las multinacionales extranjeras han hecho alarde de su poder-, ha producido ya una reducción de la producción industrial.

La mayoría de los expertos que conocen las tácticas que las corporaciones energéticas utilizan para subir las tarifas, ponen en duda incluso la misma idea de “crisis”, en

particular cuando las compañías de energía bajan la producción “por razones de mantenimiento”. Esta estrategia fue la utilizada por las multinacionales en California, Nueva Zelanda, Australia y en otras regiones, particularmente en época de reactivación y crecimiento, cuando la demanda es alta y el Estado no está dispuesto a intervenir en contra de las empresas de energía.

Finalmente, la crisis energética ha ocasionado conflictos con países vecinos de Argentina, en especial Chile, Uruguay y Bolivia. En respuesta a la crisis provocada por las multinacionales, Kirchner ha reducido las exportaciones de gas a Chile y Uruguay con el fin de disponer de suministro para las industrias y consumidores locales. Además, ha firmado un acuerdo con el Presidente de Bolivia, Mesa, para envíos adicionales de gas, que han provocado la cólera del pueblo boliviano quien exigía una nueva ley de hidrocarburos favorable al Estado boliviano, antes de que se alcanzaran nuevos acuerdos. El impacto de nivel bajo y medio de la crisis energética ha traído a primer plano un *contradicción* importante del régimen de Kirchner y de la mayoría de sus partidarios: el conflicto entre las privatizadas multinacionales de propiedad foránea, que Kirchner defiende, y las exigencias del pueblo para que se lleve a cabo una investigación, la renegociación y la re-nacionalización de las industrias estratégicas por sus grandes beneficios, prácticas abusivas, y mínimo impacto en la creación de empleo, en la reducción de la pobreza, en los ingresos por impuestos y en el crecimiento de la industria nacional. La cuestión de la energía, con todas sus ramificaciones, tanto en sus costes directos para el crecimiento y el nivel de vida como por su valor simbólico que recuerda la continuidad con la época precedente de corrupción y saqueo, es un asunto capital para el futuro desarrollo de Argentina y para la estabilidad del régimen de Kirchner.

Los acuerdos energéticos suscritos por Kirchner con Venezuela, Brasil y Bolivia pueden temporalmente solucionar el problema de suministro de gas, pero no abordan el problema relacionado con la generación de electricidad. Con una demanda que crece en 1.000 megavatios al año, con unas reservas de 3.000 Mw, y sin previsión de nuevas plantas de producción por parte de las compañías eléctricas de propiedad extranjera, Kirchner se enfrenta a una grave crisis política y económica, en especial con la reactivación económica y el crecimiento de la producción industrial.

Kirchner es “víctima” de su propia ideología (el neo-liberalismo), de sus relaciones estructurales (con los propietarios extranjeros de las plantas de producción de energía y de electricidad), y de sus alianzas políticas (con el Partido Peronista- autores y ejecutores de las privatizaciones y del subsiguiente pillaje del Presidente Menem).

Cuando Kirchner comenzó a ceder a las presiones para la subida de los precios de los servicios públicos privatizados a favor de compañías extranjeras, su popularidad empezó a bajar desde el 80 % a finales de 2003 al 60% en junio de 2004. Kirchner conoce muy bien las normas del capitalismo neo-liberal: el único camino para asegurar que se produzcan nuevas inversiones de los propietarios de industrias estratégicas es aumentar su tasa de beneficios por encima de las del “capitalismo normal”. Sin sacrificar el nivel de vida de los trabajadores y sin aumentar los costes para los productores locales con el fin de aumentar los beneficios exigidos por las multinacionales extranjeras, Kirchner no hubiera obtenido la promesa de nuevas inversiones de los propietarios de las industrias de electricidad, gas, agua telecomunicaciones e infraestructuras. Los altos costes que tendrá que pagar por su claudicación en aras de los grandes beneficios exigidos por los sectores estratégicos no serán exclusivamente la bajada de su popularidad sino su legitimación como líder “nacional”. Además, ello reducirá el crecimiento en los sectores que precisan mucha mano de obra, de ahí que no se consiga reducir el desempleo y la pobreza.

El capital “nacional” de Argentina invierte mediante préstamos, no por la reinversión de sus beneficios en los sectores productivos (los beneficios se envían fuera o se invierten en bonos locales de alto rendimiento a corto plazo). El crecimiento actual no se basa en nuevas inversiones sino en la activación de los recursos inactivos. Cuando la capacidad instalada iguale a la demanda, el crecimiento se parará a no ser que haya inversiones nuevas, que la burguesía argentina sólo realizará si tiene acceso a créditos. Y los sectores financieros nacionales y extranjeros no ofrecerán crédito a no ser que el régimen de Kirchner los "compense" por las pérdidas especulativas sufridas tras la devaluación. Los bancos privados extranjeros se negaron a financiar hasta que Kirchner cedió a sus exigencias de aumentar el pago ofrecido a los especuladores privados extranjeros que habían invertido en bonos.

A corto plazo, en 2004, Argentina continuará una “recuperación” basada en parte en el extraordinario crecimiento de la exportaciones agrarias, el alto precio del petróleo y la reactivación de la industria tras el terrible colapso de 1998-2002. Pero los cimientos estructurales e ideológicos subyacentes, que produjeron la crisis y la rebelión popular, todavía continúan en pie. Más aún, la tendencia del Régimen es la de dirigirse hacia una mayor adaptación a las elites extranjeras beneficiarias del modelo neo-liberal. Ante todo, el régimen ha “legitimado” las privatizaciones y ha pedido mayores inversiones extranjeras para "el desarrollo" de infraestructuras básicas y para la explotación de recursos estratégicos. De acuerdo con esta prioridad, el régimen de Kirchner se está moviendo gradualmente (y con una "populista" demagogia ocasional) hacia la realización de políticas económicas que aumentan la rentabilidad para las empresas incluso a costa del nivel de vida. La reforma bancaria y el acuerdo sobre la deuda con los especuladores de ultramar debilitarán la capacidad del régimen para dar satisfacción a las exigencias sociales de la mayoría de los argentinos que se encuentran por debajo del umbral de pobreza. Lo incuestionable realidad son una serie de concesiones graduales a los propietarios foráneos de sectores económicos estratégicos y a los especuladores de ultramar, diseñadas para facilitar la financiación de inversiones locales. La concepción de Kirchner de la cara decente " del capitalismo normal " es una simple máscara de arcilla que, cuando desaparece, deja al descubierto la cara del viejo capitalismo de “coge el dinero y corre”, del muy reciente pasado, que sonrío con satisfacción.

Movimientos sociales: Piqueteros, Asambleas de Vecinos y Punteros.

Muchos autores consideran la insurrección de los días 19 al 21 de diciembre de 2001, que echó al entonces Presidente De la Rúa, como un punto de inflexión en la historia de Argentina. No hay duda de que la masiva y, en gran parte, espontánea movilización condujo a espectaculares desafíos al orden político existente, al menos a corto plazo. Por todo el país, asambleas de vecinos de barrios, anteriormente tranquilos, de clase media baja, e incluso de clase media, exigían la devolución de sus ahorros. Por primera vez, se produjeron manifestaciones unitarias de parados y de grupos de asociaciones de vecinos de clase media. El clientelismo, sistema de dominio por medio del cual los jefes peronistas controlaban a los barrios pobres, saltó por los aires mientras surgían nuevos movimientos independientes de desempleados que tomaron las calles, cortaron el

tráfico y negociaron concesiones directamente con el Estado. Debates públicos sobre asuntos de interés común, en los que se implicó la quinta parte de la población adulta, reemplazaron a las elites que trapicheaban en el Congreso en lo que denominaban “políticas democráticas”. La clase política en su totalidad, sus partidos y las instituciones públicas cayeron temporalmente en el mayor descrédito. El pueblo de Buenos Aires llegó, incluso, a asaltar el Congreso. De la misma manera, en provincias tomaron las asambleas legislativas, tiraron muebles por las ventanas expresando su cólera hacia la venalidad e insensibilidad de los legisladores y de los responsables de los partidos que controlaban los procesos electorales y elegían a sus representantes. Durante las primeras semanas y meses que siguieron a los días 20-21 de diciembre de 2001, parecía que estaba emergiendo un orden político nuevo, un nuevo discurso, una forma diferente de “hacer política”.

El movimiento de parados, con sus activistas piqueteros, estaba organizando una amplia red entre los más pobres de los pobres. Los obreros en paro del antiguo sindicato del metal aplicaban sus viejas formas de organización, aprendidas en las fábricas, para movilizar a los parados en sus nuevas actuaciones en los barrios. El corte de las calles tuvo el mismo efecto que las huelgas organizadas en las fábricas al paralizar la circulación de mercancías. A diferencia de los burocratizados sindicatos, los movimientos de parados tomaban las decisiones en masivas asambleas populares. La organización directa y autónoma, libre del control de los partidos parecía estar a la orden del día. Hubo una “sensación” de que se estaba construyendo un nuevo orden, más responsable, sensible y totalmente democrático.

Pero no fue así. En sólo dos años, el proceso “democracia desde abajo” comenzó a decaer y llegó a la retirada completa durante el primer año del Régimen del Presidente Kirchner (mayo de 2003-abril de 2004).

¿Qué ha ocurrido con la promesa de un nuevo orden político “desde abajo”? ¿Qué ha fallado? Dos años y medio después, ¿qué ha quedado de la insurrección de los días 20-21 de diciembre de 2001?

La extensión inicial de la revuelta popular- su carácter espontáneo, masivo y autónomo- se ha convertido en su debilidad estratégica, debido a la ausencia de un liderazgo

nacional capaz de unificar las diversas fuerzas en apoyo de un programa coherente dirigido a la toma del poder del Estado. En su lugar, la fuerza del “movimiento” de trabajadores desempleados se fragmentó en una serie de movimientos más pequeños, cada uno dirigido y controlado por líderes locales o por pequeños partidos de izquierdas. Al principio, las asambleas de clase media atrajeron a centenares de vecinos a las discusiones maratónicas de carácter global que, en la práctica, dejaron exhaustos a quienes participaban en ellas sin que se llegara a algún tipo de dirección formal, programa concreto o, al menos, a una amplia coordinación en la ciudad. A su vez, los pequeños partidos de izquierda dirimían sus conflictos internos en las asambleas, espantando a mucha gente con su jerga, sus programas maximalistas y su incapacidad para resolver los acuciantes problemas del momento, como la recuperación de los ahorros de los depositantes de clase media en bancos extranjeros que se encontraban congelados y devaluados.

Entre el 20-21 de diciembre de 2001 y julio de 2002, los movimientos de masas, a pesar de sus divisiones, se mantuvieron a la ofensiva en un desafío al Presidente interino Duhalde. Eran los dueños de la calle y rechazaban la legitimidad del sistema político. En ese periodo de medio año, mientras que la crisis económica se agudizaba, el desempleo crecía hasta alcanzar a más de la cuarta parte de la mano de obra y las clases medias perdían más del 60 % de su poder adquisitivo, las tres confederaciones sindicales (desde la derecha a la izquierda) fueron incapaces de responder a la crisis política. Los líderes de los parados no hicieron esfuerzo alguno para crear un nuevo sindicato de base. La magnífica idea original de autonomía respecto de los partidos políticos tradicionales, se convirtió en un slogan para justificar la aparición de líderes locales personalistas en cada barrio, que socavaron cualquier intento de unificar las fuerzas en un movimiento social a escala nacional, o al menos municipal. La “Autonomía” entre un par de barrios con influencia estudiantil se transformó en una excusa para desentenderse de la política y volcarse en proyectos de auto-ayuda. La crisis continuó, el régimen de Duhalde evaluó su fuerza y recursos para sofocar los movimientos ciudadanos por medio de la represión. En junio de 2002, un inspector de policía asesinó a dos piqueteros desarmados en un enfrentamiento que quedó grabado en video. El régimen decidió conceder centenares de miles de planes de trabajo de 6 meses a las organizaciones de piqueteros y a los dirigentes locales peronistas. Los líderes de los piqueteros, en principio, veían los planes de trabajo como una solución a corto plazo para hacer frente a la desnutrición y al crecimiento de la indigencia. Originalmente, los

planes de trabajo movilizaron a centenares de miles de personas porque suponían un beneficio concreto en circunstancias urgentes. Aunque se incluían otras reivindicaciones mucho más estructurales- por ejemplo, el rechazo de la deuda externa y la renacionalización de los bancos e industrias energéticas privatizadas- en ese momento, los “planes de trabajo” se convirtieron en el objetivo central de los movimientos de masas. “El éxito” se medía por qué grupo o líder tenía más acierto en la negociación para conseguir un mayor número de planes de trabajo en el plazo más corto y con el menor número de trámites burocráticos. Los “planes de trabajo” que pagaban sólo 50 \$ al mes (150 pesos devaluados) se encontraban muy por debajo del nivel de la pobreza, y muy cerca del que se considera pura indigencia. El régimen de Duhalde continuaba desacreditado, asediado, pero a través de los planes de trabajo comenzó a reconstruir un aparato local con el fin de debilitar las organizaciones de base.

Mientras tanto, el Gobierno inició el proceso de descongelación y de pago, al menos, a una parte de los ahorradores de la clase media, declarándose en quiebra respecto a la deuda privada y “estabilizando” la precaria economía. Al capitalizar las disensiones y divisiones entre el movimiento piquetero y al convertir a los líderes locales en distribuidores de los planes de trabajo, el régimen de Duhalde consolidaba su poder a nivel nacional, abría una brecha entre los ahorradores de clase media y los desempleados, y limitaba la influencia de los movimientos populares a sus lugares inmediatos. Durante su año en el poder (2002), Duhalde perdió toda su credibilidad política mientras la crisis socio-económica- con más del 53 % de la población por debajo del umbral de la pobreza- continuaba. En una maniobra en busca de una nueva legitimación del sistema político, convocó en mayo de 2003 nuevas elecciones presidenciales y al Congreso. Las profundas divisiones en el Partido Justicialista condujeron a la presentación de varios candidatos “peronistas”. La ultraderecha presentó al anterior presidente Menem, responsable del colapso de la economía, maestro de la corrupción masiva y odiado por la mayoría de los argentinos. Su principal rival fue Kirchner, antiguo gobernador de la provincia de Santa Cruz, que se presentó a sí mismo como el candidato reformista, comprometido con los derechos humanos, decidido a depurar de la corrupción al Tribunal Supremo, la policía y otras instituciones públicas, y a revitalizar la economía nacional- la vuelta al capitalismo normal- aunque ello supusiera enfrentarse al FMI.

La elección de Kirchner: la derrota de la izquierda.

La primera y principal derrota política de la izquierda tuvo lugar en las elecciones presidenciales de mayo de 2003. La izquierda, como de costumbre, se dividió en pequeños grupos marxistas que presentaron a sus eternos candidatos mientras que la mayoría de izquierdas pedía el voto “militante” de la abstención. Ambas facciones sufrieron una grave derrota. Los que se presentaron obtuvieron escasamente el 1 % del voto mientras que los abstencionistas fracasaron ya que la participación fue de más del 70 %- la más alta de las últimas décadas. Menem, que alcanzó la mayoría simple en la primera vuelta, abandonó en la segunda cuando las encuestas pronosticaban una derrota masiva y humillante, cercana a los tres cuartos partes del electorado. Kirchner se convirtió en Presidente.

La izquierda, los líderes piqueteros y los grupos militantes de derechos humanos se equivocaron por completo al interpretar los cambios de circunstancias. “Se comportaron- me dijo un líder de la minería del carbón- como si tuvieran la cabeza metida en un balde. Al escuchar el eco de sus slóganes, creyeron que era la voz del pueblo”.

Tras cinco años de recesión que condujeron a una depresión económica y al colapso financiero, después de 18 meses de manifestaciones y movilizaciones en los que la izquierda, dividida y enfrentada, no fue capaz de cambiar el régimen político mediante acciones extra parlamentarias - ni tan siquiera de presentar un candidato y un programa electoral unificado-, la masa de votantes, incluida la mayoría de los habitantes de los barrios pobres y de la empobrecida clase media, depositaron sus votos y sus esperanzas en Kirchner, con su imagen “de oposición al orden establecido”.

La presidencia de Kirchner: los movimientos sociales y el nuevo proyecto político.

El presidente Kirchner, que tomó posesión en mayo de 2003, continuó con los planes de trabajo iniciados por su predecesor Eduardo Duhalde: Dos millones de cabezas de familia con hijos recibían 50 \$ al mes, a través del que sigue siendo el principal programa social del gobierno. Esta cantidad cubre sólo un tercio del coste de los productos alimenticios básicos, estimado en 140 \$ al mes y sólo afecta al 40 % de los

desempleados o subempleados. El objetivo primordial de los planes de trabajo, desde su inicio hasta la fecha, nunca fue el de solucionar el problema de la desnutrición o el del paro sino el de “contener” el descontento. Al principio, el programa de planes de trabajo estimuló la organización de los parados y la exigencia de más planes de trabajo con una duración superior a los seis meses de contrato previstos inicialmente.

Los “planes de trabajo” fracasaron para conseguir la creación de nuevos puestos de trabajo a tiempo completo y han servido para consolidar una clase permanente de indigentes sin futuro. En la gran mayoría de los casos, los “planes de trabajo” han caído bajo el control de los autoritarios gobernadores de provincia, alcaldes y dirigentes de barrio que, con frecuencia, han entregado el dinero a clientes locales, que ni estaban en paro ni tenía verdadera necesidad, en detrimento de las familias indigentes.

Los Movimientos de Trabajadores Desempleados (MTDs) están dividido en tres sectores: los que apoyan a Kirchner, los que le prestan “apoyo crítico” y los que se oponen a él. Los sectores de los MTDs favorables a Kirchner (en sus dos variantes) están acompañados de las tres principales confederaciones de sindicatos (la CTA, la CGT y la de los Trabajadores del Transporte), de grupos de obreros de fábricas recuperadas y de los principales grupos de derechos humanos (incluidos el de las Madres de la Plaza de Mayo, y el movimiento de las abuelas).

El MTD que se opone a Kirchner, por su parte, está dividido en varias coaliciones que, con frecuencia, actúan independientemente unos de otros. Sectores de los obreros de las fábricas ocupadas, encabezados por los de la fábrica de cerámica Zanón, están en la oposición pero se encuentran muy aislados ya que muchos de sus antiguos aliados se han convertido en políticos colaboracionistas.

La profunda división entre los movimientos se hizo visible en la movilización para conmemorar el aniversario de la insurrección de los días 20-21 de diciembre. En 2003, tres diferentes “coaliciones” se reunieron, a horas distintas, frente al Palacio Presidencial: la primera, desde las 12 del mediodía a las 2 de la tarde, reunió a 10.000 personas; la segunda, desde las 3 de la tarde a las 5, tuvo 15.000; la tercera, desde las 6 a las 8 de la tarde, reunió a 25.000. Cincuenta mil manifestantes en paro hubieran constituido una demostración de fuerza formidable si no se hubieran diluido en tres

protestas separadas que ponían de manifiesto la debilidad de un movimiento profundamente dividido e incapaz, tan siquiera, de conmemorar un “momento de inflexión” histórico.

La desunión de diciembre de 2003 podría considerarse otro “momento decisivo” al evidenciar el declive de un movimiento dividido y parcialmente absorbido. El régimen del “capitalismo normal” parecía haber consolidado temporalmente su autoridad, una vez más promoviendo el apoyo de la clase media contra los militantes de los MTDs. Las movilizaciones se habían centrado en los “planes de trabajo” y en los “puestos de trabajo decentes”, algo que suscitaba poca resonancia en la- en una ocasión rebelde pero ahora conformista- clase media una vez recuperados parte de sus ahorros. Las marchas por el centro de Buenos Aires no atraían ni participantes ni aplausos. Las antiguas caceroladas estaban silenciosas; las protestas callejeras parecían provocar, más que la compasión, la ira de los ciudadanos de clase media que viven fuera de la ciudad y de los trabajadores del transporte. Unos pocos líderes de los MTDs organizaron las protestas mientras se preparaban para presentarse a elecciones para cargos en los partidos tradicionales.

Algunos de los dirigentes de los MTDs no eran desempleados sino dirigentes de partidos políticos que encabezaban y dividían el movimiento. Otros eran activistas sindicales que aspiraban a dirigir sus sindicatos. El exiguo grupo de impostores “autonomistas”, seguidores intelectuales de Tony Negri, prácticamente habían desaparecido de la escena social, y sus seguidores se habían unido a uno u otro de los influyentes grupos que distribuían los planes de trabajo

.
El movimiento de auto-gestión en las fábricas se había frenado y en la práctica no se han producido nuevas ocupaciones, mientras que las ya existentes se encuentran bajo la tutela del régimen y, en algunos casos, sus antiguos abogados laboristas de tendencia troskista ya no tienen influencia alguna. Pero el paso atrás más llamativo es la práctica desaparición de las asambleas de vecinos de clase media. En ciertos barrios, todavía los comités se reúnen para discutir los problemas de la vecindad, pero las grandes asambleas al aire libre son ya un recuerdo distante. Pero lo más lamentable es que significativos sectores de la clase media se han convertido a la ideología autoritaria y represiva de la ultraderecha para combatir el aumento de los índices de delincuencia. La

mayor manifestación que ha tenido lugar en Buenos Aires en los últimos dos años fue la de 150.000 personas- casi en exclusiva de clase media- que protestaban frente al Congreso contra la delincuencia, poniendo el énfasis en una mayor represión y sin aludir a la inmensa pobreza y al desempleo como causa directa de la delincuencia.

Durante el primer año de régimen de Kirchner, los MTDs parecían aislados, y algunos controlados por partidos izquierdistas y dirigentes de los partidos tradicionales. Al mismo tiempo que se diluían las luchas contra el régimen, se intensificaban las que tenían lugar en el seno de los movimientos. Mientras que las divisiones, previamente, se basaban en la competencia *entre* barrios, las nuevas disensiones se producían en el *interior* de los barrios. Por ejemplo, una “coalición” de MTDs incluye al Polo Obrero, a la Coordinadora Unidad de Barrios (CUBA), a un sector del MTR, y al Movimiento Territorial de Liberación (MTL). Otro grupo de organizaciones de parados, relacionado con el Partido Comunista Revolucionario, es la CCC, (Corriente Clasista Combativa) y otra facción es la del Movimiento Teresa Rodríguez. Incluso los grupos de derechos humanos han establecido líneas divisorias. La Universidad Popular de las Madres de la Plaza de Mayo ya no permite que los piqueteros anti-Kirchner se reúnan en su plaza, mientras que apoyan a otros que sí apoyan al régimen como los de Barrios de Pie, Patria Libre y ciertos sectores del MTD, Aníbal Verón.

El efecto final de estas divisiones ha sido debilitar el poder de atracción y las posibilidades de las organizaciones de piqueteros. La concentración del 1 de mayo de 2004 (Día del Trabajo) fue un ejemplo, y la baja participación, el resultado de la desunión, ya que cada organización piquetera lo celebró por su cuenta y la asistencia sólo fue una fracción de la habida los dos años anteriores. Además de las rivalidades personales y los largos conflictos de años, las diferencias fundamentales que se producen en los movimientos de parados son de carácter político, y en especial en la actitud y respuesta que tienen ante el régimen de Kirchner. Las entrevistas mantenidas en abril de 2004 con un gran número de militantes y líderes piqueteros en el Gran Buenos Aires revelan una profunda crisis en el movimiento, una aguda división en la opinión sobre el régimen, en el nivel de militancia entre los trabajadores en paro y en las perspectivas políticas futuras.

Dos ejemplos pueden ser suficientes para ilustrar estas divisiones políticas: El Movimiento de Trabajadores Desempleados-Aníbal Verón (MTD-AV) y el Movimiento Teresa Rodríguez (MTD-Martino). Se debería mencionar que incluso en estos movimientos existen diferencias internas y posibles desacuerdos futuros.

El MTD-AV, como muchas de las organizaciones piqueteras, lleva a cabo su análisis empezando por la descripción de la “nueva situación”. Alegan que el régimen de Kirchner es un régimen híbrido en el que se unen la burguesía nacional y las corporaciones multinacionales, algo sustancialmente distinto de los regímenes “neoliberales” anteriores. Citan las políticas progresistas del régimen en materia de derechos humanos, los cambios en el ejército (con la jubilación de 40 generales), la resistencia ante el FMI, el apoyo a Castro y Chávez, la revisión de unas leyes laborales retrógradas y su política menos represiva con las protestas públicas. A estos aspectos positivos de Kirchner, el MTD-AV añade una “apreciación negativa” de la situación actual de los movimientos de masas. Afirman que las disensiones internas en sus propios movimientos, la decreciente participación en las protestas, la “desorientación general” de las masas para enfrentarse a las nuevas políticas del régimen y la “desarticulación” de los movimientos como consecuencia de los planes de trabajo puestos en marcha por el gobierno, han ocasionado la pérdida del consenso entre los movimientos de parados, lo que dificulta la lucha. El resultado de todas estas circunstancias ha sido que el MTD-AV ha adoptado una postura de apoyo crítico al régimen, y ha cambiado desde una actitud de conflicto y confrontación a la de negociación y discusión, principalmente sobre la financiación del número de planes de trabajo y de proyectos locales. Este cambio de política ha llevado a la desintegración en la práctica de las pequeñas “tendencias autonómicas descentralizadoras” del movimiento organizado por los discípulos universitarios del profesor Jon Holloway de la Universidad de Edimburgo. La cuestión del “poder político”, y más específicamente, del poder estatal, y de las potenciales ventajas económicas y políticas, son factores clave en la formación de actitudes políticas entre los desempleados. Los líderes del MTD-AV aducen que existen tres posibles acercamientos al régimen de Kirchner: la posición de “los trabajadores de Pole (controlados por el Partido de los Trabajadores-Partido Obrero (PO) que proclaman que “nada ha cambiado” y continúan con la política de confrontación; la de los que se inclinan por la conciliación y la subordinación, impulsada por D’Elia de Matanzas y Barrios de Pie, y la suya de “independencia política

pero renunciando a la confrontación y confiando en la negociación”, que de hecho es un apoyo crítico. El MTD-AV argumenta que dado que Kirchner goza del apoyo del 60 % del electorado “no existen condiciones para la confrontación”, y basa su estrategia en presionar al régimen para que aumente de 150 pesos (50 \$) a 300 pesos la cantidad establecida para los planes de trabajo, y en oponerse a la reducción de beneficiarios. Aspiran a ampliar su organización para incorporar a trabajadores temporales y a unir fuerzas con los obreros sindicados para conseguir “trabajos de verdad”, es decir, a jornada completa, encuadrados en sindicatos, en suma, bien pagados.

Así como la evaluación del MTD-AV sobre el grado de apoyo del que disfrutó Kirchner durante la mayor parte de los años 2003-2004, se ajustaba a la realidad, falló al no percibir la bajada de popularidad y el creciente descontento a finales de su primer año. Su percepción del progresismo de Kirchner estaba distorsionada y se basaba en las buenas relaciones que mantenían con su régimen. Ponían el énfasis en la “resistencia” de Kirchner al FMI, pero ante las preguntas admitieron que Kirchner había transigido con las condiciones impuestas por el FMI, continuaba pagando la deuda externa a las Instituciones Financieras Internacionales y proponía pagar, al menos parcialmente, a los poseedores privados de bonos de deuda. Más aún, el MTD-AV admitía que los niveles de pobreza y las desigualdades no habían cambiado, y que las industrias estratégicas y los bancos privatizados continuaban en manos de las multinacionales extranjeras. El MTD-AV estaba dispuesto a aceptar las concesiones inmediatas del régimen a cambio de renunciar a la exigencia de cambios estructurales, al menos en el contexto de lo que percibían como un movimiento que se desvanecía y un régimen “popular”.

Como contraste, el Movimiento Teresa Rodríguez mientras se oponía al régimen de Kirchner, se encontraba inmerso en un debate interno sobre su futuro. Roberto Martino, líder del MTR, describe así el carácter conservador del régimen de Kirchner: “Recortes en los planes de trabajo, vuelta al clientelismo político, destrucción de la alianza entre la clase media y los desempleados, ausencia de planes para la reapertura de las fábricas cerradas, parálisis de los movimientos sociales, altos niveles de pobreza, apoyo al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y la Unión Europea, subvenciones a las industrias privatizadas- en especial a los muy lucrativos sectores petrolífero, de electricidad y de energía-, que podrían financiar puestos de trabajo y servicios sociales. A juicio de los líderes de los movimientos piqueteros de oposición, Kirchner ha

“restaurado” la burguesía nacional, proporcionándole un liderazgo y una dirección, mientras se aseguraba el favor de la clase media, incluso el transitorio apoyo popular de los parados. Como ejemplo, citan el apoyo que Kirchner se ha asegurado de Hebe Bonafini, del grupo de derechos humanos Madres de la Plaza de Mayo - que ha sido un referente moral-, lo que le ha granjeado legitimidad y ha reforzado su régimen. Los piqueteros en la oposición señalan el “cada vez mayor rechazo de la clase media al corte de carreteras, y el creciente abandono de las asambleas de barrio con la esperanza de que Kirchner resuelva sus problemas”. En resumen, las oposición piquetera describe a Kirchner como triunfador a corto plazo, por haber reforzado la “política institucional”, y por haber canalizado parcialmente la política que se desarrollaba en las calles hacia el Congreso y la Administración, debilitando así el innovador estilo democrático de las asambleas, que había emergido antes e inmediatamente después de la insurrección de los días 20-21 de diciembre.

Entre los piqueteros de la oposición existen dos líneas de pensamiento y de acción: la de los que creen que Kirchner es una mera continuación de los políticos del pasado (Polo Obrero-Troskista) y lleva a cabo la misma política en la calle, y la de los que creen que los nuevos tiempos requieren nuevas tácticas y estrategias. Esta última es la que mantiene Martino, quien critica a los piqueteros “que todavía piensan que estamos en los días 21/21 de diciembre del 2001 y no dejan de cortar carreteras”. Postula que hay “que buscar nuevas formas de lucha, para conseguir legitimación” y mantiene que la mayoría de las protestas actuales son “testimoniales”, habida cuenta de que el régimen sabe que están aisladas y que, antes o después, los manifestantes volverán a sus casas”. Afirma que el movimiento no puede reducirse a luchar sólo por los planes de trabajo, y pide que, para contrarrestar la influyente propaganda del régimen- que asegura que los parados que piden planes de trabajo “no quieren trabajar”-, se cambie de estrategia para exigir “un salario universal en todos los sectores de la clase trabajadora (empleados y parados), basado en verdaderos trabajos (trabajos estables de jornada completa)”.

Esta corriente crítica de los piqueteros no tiene aliados entre la confederación de sindicatos, y se encuentra enfrentada con otros piqueteros críticos que reclaman una “movilización general” que conduzca a la “huelga general”.

Enfrentado a la debilidad general para desafiar el poder del Estado en las circunstancias actuales, el MTR invita a comprometerse en “las políticas territoriales para animar a las masas a implicarse en la política local”. Martino aboga por un proceso en dos fases, la primera, que llevaría a constituir un poder municipal, para después acceder al poder nacional, así como planes de producción para recuperar la “cultura del trabajo”. Apela a “una administración local autónoma y a la educación para preparar a los trabajadores para la auto-gestión”. Lo que pide Martino es “un nuevo Estado en el interior del nuevo Estado”. Para seguir esta nueva dirección el MTR propone que el movimiento piquetero se amplíe e incluya a trabajadores empleados, profesores, trabajadores sanitarios y otros sectores de trabajadores temporales mal pagados.

Los planes de trabajo- que se iniciaron como exigencias legítimas sobre la que organizar grupos de base, con experiencia en asambleas locales y en auto-gestión-, se han convertido, en algunos casos, en instrumentos de promoción personal para los líderes locales bien relacionados con el régimen. Irónicamente, el sistema de clientelismo local se ha justificado como “estructuras horizontales”, una ideología popularizada por los ideólogos del “anti-poder”.

El fracaso de los “horizontalistas” para conseguir el control democrático se debe en gran parte a la falta de conciencia de clase que es necesaria para ejercer ese control. La democracia en el movimiento piquetero sin conciencia de clase no conduce a un proceso político asambleario sostenible. En su lugar, las rebeliones populares y la militancia inicial han desembocado en una concentración exclusiva en los asuntos inmediatos, en la dependencia social de los líderes piqueteros locales y, en algunos casos, de los dirigentes políticos.

El énfasis que los ideólogos anti-poder pusieron en la “autonomía” y en la “espontaneidad” de los piqueteros en el momento de la revuelta se convirtió, después, en la otra cara de la moneda que condujo a la subordinación de los piqueteros a los dirigentes de los nuevos regímenes locales. Ambas fases ponen de relieve la ausencia de una formación organizada con conciencia política de clase. La falta de cualquier plan estratégico de acción condujo a la dispersión de los movimientos hacia una variedad de políticas reformistas, colaboracionistas y sectarias.

El movimiento piquetero se constituyó sobre una base de obreros que jamás habían trabajado en fábricas y que, por ello, tenían poca o ninguna conciencia de clase, y de antiguos trabajadores desplazados de la producción en fábricas desde hacía cuando menos una década. En muchos casos, ello condujo a las “soluciones individuales” en lugar de llevar a un consenso colectivo a partir de la rebelión inicial.

El gran logro del movimiento piquetero fue la organización de las masas de parados para la acción colectiva. Su limitación, el fracaso para avanzar en la conciencia de clase, lo que ha conducido al actual callejón sin salida y a facilitar el terreno para la reaparición de la política clientelar bajo los auspicios del “benigno” reinado del régimen de Kirchner. Al poner el énfasis en lo municipal en lugar de en las cuestiones nacionales se fragmentó el movimiento en centenares de grupos que competían entre sí.

Si bien la lucha por los planes de trabajo inicialmente fue un paso importante para paliar el hambre y la desnutrición de los niños, la siguiente focalización exclusiva en esta cuestión tuvo diversos efectos negativos. En primer término, dio lugar a una perspectiva “asistencial” (trabajo social) entre los piqueteros, y a una dependencia de las subvenciones mínimas del Estado, en lugar de servir para provocar una más profunda reflexión sobre la naturaleza del Poder. Los movimientos se centraron en la lucha y la confrontación (con cortes de calles, toma de oficinas) pero con estrechez de miras. Con la puesta en marcha de los planes de trabajo financiados por el Estado, los movimientos piqueteros se convirtieron, en palabras de Martino, “en una organización estatal; nos transformamos en un apéndice social del Estado para distribuir los subsidios”. El rápido cambio en las formas y objetivos del movimiento piquetero necesita una reflexión importante y no limitarse a la convocatoria para la “vuelta a las calles”.

En el actual callejón sin salida entre piqueteros ocupados en acciones aisladas o colaboracionistas que apoyan al “moderado” régimen neoliberal, se han propuesto una serie de alternativas. El MTR-AV propone luchar presionando a las grandes empresas para que financien proyectos productivos de los piqueteros, uniendo así a trabajadores empleados y en paro para promover puestos de trabajo, despertar la conciencia de clase y la solidaridad, incluida la auto-explotación que, según Martino, es “el trabajo voluntario para conseguir la liberación”. Se cita como modelo la experiencia en Mosconi, una ciudad petrolífera donde los piqueteros consiguieron obtener recursos de

las privatizadas compañías extranjeras del petróleo al bloquear el transporte. Mosconi se ganó la legitimidad al apoyar la seguridad y los salarios de los trabajadores empleados y las necesidades sociales de la comunidad para conseguir la hegemonía ideológica, como paso previo para el desafío al poder del Estado. El problema que se plantea al poner como ejemplo Mosconi es que las condiciones allí son muy diferentes a las de Buenos Aires y a las de otras áreas metropolitanas. La mayoría de los desempleados eran antiguos trabajadores del sector petrolífero, con vínculos sociales, familiares y sindicales con los trabajadores en activo, en una ciudad con una sólo industria, lo que no es el caso con la mayoría de las industrias en Buenos Aires. Además, los obreros empleados en grandes fábricas de Buenos Aires han mostrado poco interés en unirse a las luchas de los piqueteros, y menos aún en apoyar sus reivindicaciones de que las compañías financiaran proyectos de los piqueteros a costa de la elevación de sus salarios. La estrategia más prometedora es la de unirse con los mal pagados trabajadores del sector público en huelgas conjuntas y combinar las reivindicaciones de creación de empleo con la mejora de los sueldos.

El Movimiento de Ocupación de Fábricas.

La ocupación de fábricas por obreros desempleados alcanzó su nivel máximo entre 2001 y 2002, con más de 10.000 trabajadores gestionando más de 100 empresas. Un movimiento todavía vivo, aunque con impulso político muy menguado. Los planes de trabajo absorbieron a muchos obreros despedidos y el régimen de Duhalde, por medio de su aparato judicial, desalojó violentamente a los obreros de las fábricas. Con Kirchner, el régimen intervino, convenció a los trabajadores para transformar las empresas en cooperativas a cambio del reconocimiento legal. La mayoría se adaptó. Muchas empresas “ocupadas” funcionan ahora, bajo la tutela del Estado, como subcontratistas de compañías privadas en condiciones de trabajo abusivas. Tienen que hacer frente al pago de las deudas contraídas por los anteriores propietarios y/ o pagar los préstamos a los bancos privados o estatales. La mayoría ha abandonado su vertiente política: ya no se comportan como parte de un movimiento ni se ven a sí mismos formando parte de la lucha de clases. Los obreros con algo más de conciencia de clase que se unieron a la ocupación actuaban sólo para proteger sus puestos de trabajo. Los abogados de izquierdas y los activistas de los movimientos de solidaridad apenas hicieron algo para promover la conciencia de clase. La mayoría de aquellos

izquierdistas han quedado marginados en las cooperativas. La principal y significativa excepción es Zanón, la enorme fábrica de cerámica que se auto-gestiona en la provincia de Neuquén. Aunque muchas otras cooperativas de obreros continúan funcionando y creando puestos de trabajo, ninguna de ellas mantiene el grado de gestión y control de los trabajadores que se ha convertido en el marchamo de Zanón. Mientras otras fábricas contratan horas extra de trabajo a precios reducidos para satisfacer las exigencias de sus contratistas, Zanón ha contratado a 140 nuevos obreros para su unidad de producción, ha aumentado ésta, mejorado la calidad y mantenido un abanico de salarios igualitario entre obreros cualificados y no cualificados. A diferencia de otras fábricas asumidas por los trabajadores y convertidas en “cooperativas”, los obreros de Zanón tienen un alto nivel de conciencia de clase y de educación política, adquiridas en las luchas de clase sostenidas antes, durante y después de la ocupación. Los obreros de Zanón constituyen el motor principal en la promoción de una revista bisemanal, *Nuestra Lucha*, y han establecido relaciones sólidas y de mutuo apoyo con el vecino MTD.

A partir de mayo de 2004, el régimen de Kirchner, se ha negado a reconocer legalmente a Zanón como una fábrica de propiedad obrera, a pesar de que la dirección de Zanón ha cumplido con todos los requisitos legales exigidos por el régimen para que se la clasificara como “cooperativa”. Aunque el Ministerio de Trabajo había prometido apoyar el asunto – desde hace más de un año- otra vez el sistema judicial se ha puesto de lado del antiguo y corrupto empresario, responsable de la quiebra, y amenaza con emitir una orden judicial de desalojo forzoso de los trabajadores. Antiguos dirigentes sindicales despedidos de sus puestos, representantes del Banco Mundial y miembros de la judicatura han apoyado a los empresarios.

La experiencia de Zanón plantea una cuestión básica: ¿Por qué es la única cooperativa de obreros del país que el régimen de Kirchner se ha negado a reconocer hasta ahora? Creemos que la respuesta se puede encontrar en el hecho de que en Zanón, la tutela estatal y el control paternalista que se ejercen sobre otras fábricas, serían difíciles de imponer, habida cuenta de la conciencia de clase de sus líderes y obreros. Los funcionarios de Kirchner actúan con el viejo estilo populista del peronismo que permite *formalmente* la existencia de representantes de los obreros en las fábricas pero que, en la práctica, los controla según la lógica del mercado capitalista. El peligro para Zanón es real porque la red nacional de solidaridad, en la que se apoya, ha sido casi

desmantelada. Las Madres han aceptado a Kirchner como a uno de los suyos y ya no permiten utilizar sus locales de la Universidad para las reuniones de Zanón y sus partidarios de Buenos Aires; el relanzamiento de su revista ha encontrado un apoyo poco entusiasta de los divididos y decadentes movimientos piqueteros; y los intelectuales han vuelto a sus obligaciones académicas o se enfrascan en “controversias más actuales”. Aunque Zanón continúa siendo un símbolo de las posibilidades de alternativa a la gestión capitalista, ya no se ve como un modelo a seguir por los trabajadores en paro o empleado que han solicitado planes trabajo o exigen obtener un simple salario.

Conclusión: Consolidación a corto plazo, crisis a medio plazo.

No hay duda de que el Presidente Kirchner ha tenido éxito en la consolidación del apoyo a su régimen al llevar a cabo los suficientes cambios en el ejército, la judicatura y la policía para dar nueva legitimidad a las desprestigiadas instituciones del Estado. Ha actuado con gran astucia al hacer frente a las condiciones del FMI en materia fiscal y presupuestaria, y mantener, al mismo tiempo, una posición nacionalista de resistencia frente a las desorbitadas exigencias de aumentar el superávit fiscal más allá del 3 % , y de proceder al pago de los bonos en manos de particulares. Pero lo más significativo ha sido que Kirchner ha dividido los movimientos sociales, ha absorbido a los principales líderes sindicales y a los de las organizaciones de pensionistas y de derechos humanos mediante unos planes de trabajo mínimos, algunas concesiones de aumento salarial, incremento de las pensiones y la retirada de la impunidad a los oficiales del ejército acusados de crímenes contra los derechos humanos. En mayo de 2004, ha anunciado un incremento de 185 millones de dólares para las pensiones más bajas de un millón setecientos mil jubilados, y de 35 millones de dólares para los empleados del sector público a quienes su política de control salarial había hecho perder poder adquisitivo.. Esta última medida ha sido la respuesta a la huelga de la ATE (Asociación de Trabajadores del Estado), apoyada por la amenaza de convocatoria de una movilización general de la Confederación de Trabajadores Argentinos (CTA).

La economía argentina ha capitalizado los excepcionales precios de sus exportaciones principales y ha aumentado los impuestos (en 2004 más del 30 % sobre lo obtenido en 2003) para alcanzar el récord de 3.900 millones de dólares. Aprovechando el gran

crecimiento industrial y de los ingresos comerciales y fiscales, el régimen de Kirchner aplacó a los consumidores de clase media con importaciones baratas, amplió las expectativas de millones de trabajadores en paro con miles de nuevos puestos de trabajo y se aguró el apoyo de importantes líderes piqueteros.

La época de la rebelión popular contra la clase política dominante ha pasado de momento. Pero a mediados de 2004, están apareciendo nuevas contradicciones en las políticas macroeconómicas de Kirchner: los obreros y empleados exigen aumentos sustanciales de salarios para compensar la pérdida de poder adquisitivo provocada por la congelación salarial; los cabezas de familia protestan contra las concesiones de Kirchner a las compañías privatizadas eléctricas y de energía de propiedad foránea para el aumento de las tarifas; el apoyo continuado de Kirchner a las compañías extranjeras (españolas principalmente) de petróleo y energía ha ocasionado un importante déficit de energía básica, cierres temporales de fábricas y un aumento considerable de las tarifas para los consumidores. Atrapado entre sus compromisos neo-liberales a favor del capital foráneo y las crecientes protestas populares contra los precios que establecen sin escrúpulos esas mismas empresas, Kirchner afronta el momento de verdad. En abril de 2004, la actividad industrial bajó un 4 % respecto de la del año anterior debido a los cortes de energía, y miles de trabajadores han sido despedidos.

Como reconocen algunos de los más lúcidos líderes piqueteros, la coyuntura política ha cambiado, y los movimientos todavía no están preparados para ello ni en el plano político ni en el organizativo.

Lo que se deduce de la masiva y extendida rebelión popular es que la insurrección espontánea no puede sustituir al poder político. Muchos especialistas y comentaristas políticos han sido incapaces de analizar en profundidad las fuerzas internas y las debilidades de la impresionante, pero momentánea, solidaridad social. Hubo escasa solidaridad de clase más allá de los límites del barrio; y los partidos de izquierda y los líderes locales hicieron poco para promover acciones masivas de clase que fueran más allá de los estrechos límites de su entorno geográfico y de sus propias organizaciones. Incluso en el seno de las organizaciones, los líderes ideológicos llegaron a sus puestos no a través elecciones de unas bases con conciencia de clase, sino debido a su capacidad de negociación para conseguir planes de trabajo o por su habilidad

organizativa. El repentino cambio de lealtades de muchos de los parados- por no hablar de la empobrecida clase media baja- han reproducido los vicios de la clase política. Los líderes piqueteros se subieron a la ola del descontento masivo; vivieron con la ilusión de revivir el San Petersburgo de octubre de 1917, sin darse cuenta de que no eran obreros soviéticos con conciencia de clase proletaria. **La gente llegó en tropel pero muchos** abandonaron en el momento en que consiguieron mínimas concesiones en planes de trabajo, pequeños aumentos salariales y promesas de más puestos de trabajo y mejor pagados.

El proceso de domesticación del movimiento se ha producido a través de las estrategias que el régimen ha ido ejecutando directa y oportunamente. Kirchner se implicó en numerosos debates cara a cara con los líderes populares; se aseguró de que los mejores planes de trabajo fueran a aquellos que estaban dispuestos a colaborar, mientras que realizaba ofertas mínimas a quienes se mantuvieron intransigentes. Mantuvo una postura independiente en relación con las exigencias más humillantes del FMI, mientras accedía a consolidar los reaccionarios cambios estructurales impuestos por sus predecesores – es decir, la privatización de las antiguas y lucrativas empresas públicas. Por su parte, el grueso del movimiento, carente de una estrategia general y de la perspectiva de una sociedad socialista alternativa, fue manipulado con facilidad para que aceptara cambios en la microeconomía, que mejoraban los peores efectos de la pobreza y del desempleo pero sin cambiar las estructuras de la propiedad, de los beneficios y del poder de los banqueros, de los exportadores agrícolas y de los monopolios energéticos.

La cuestión del poder del Estado nunca se planteó en un contexto serio. Se convirtió en un mera declaración de intenciones con la que grupos sectarios de izquierda pretendieron socavar el contexto organizativo a través del cual el desafío al Estado hubiera sido significativo. Fueron incitados y ayudados por un pequeño, pero ruidoso, grupo de ideólogos que convirtieron en virtud las limitaciones de algunos parados para aleccionarles en la doctrina del “anti-poder”, una confusa mezcla de errores sobre política, economía y poder social. Por lo demás, los líderes emergentes de los piqueteros, se esforzaron con coraje en concienciar a las masas sobre las virtudes de la acción extra-parlamentaria y los vicios de la clase política, pero fueron incapaces de

poner en pie una alternativa de poder institucional que unificara los movimientos locales en una fuerza centralizada para desafiar al Estado.

Faltó claramente una *organización política* unificada (bien fuera un partido, bien una combinación de partido y movimiento), enraizada en los barrios populares, capaz de establecer órganos representativos para promover la conciencia de clase y mostrar el camino para la toma del Poder. A pesar de lo masivo y continuado del periodo inicial de insurgencia (diciembre 2001- julio 2002), no surgió un partido o un movimiento que lo representara sino una multiplicidad de grupos locales- con programas diferentes-, que se enzarzaron pronto en luchas intestinas por una hegemonía efímera, que condujo a millones de potenciales partidarios hacia grupos locales enfrentados y carentes de cualquier perspectiva política.

El slogan “Que se vayan todos”, que circuló ampliamente entre quienes se habían comprometido con la lucha, se volvió claramente contraproducente en la medida en que retrasó o cortocircuitó la necesaria educación política que unos líderes emergentes precisaban para conseguir un compromiso más profundo, y a largo plazo, en las acciones revolucionarias de las masas. Sin embargo la rebelión de los días 20-21 de diciembre de 2001 se ha convertido en un punto de referencia histórico para luchas futuras y en advertencia- dirigida al imperialismo estadounidense, al Fondo Monetario Internacional y a la clase dirigente local- de que existen límites para la explotación y el pillaje. Además, los métodos de acción extra-parlamentarios resultaron, sin duda, más efectivos para echar a los dirigentes corruptos e inicuos que los procesos electorales parlamentarios o los judiciales.

A finales del primer año de la presidencia de Kirchner (mayo de 2004) el movimiento piquetero resurge como la principal oposición, y vuelven los movimientos multitudinarios, a los que se suman obreros sindicados, con nuevas exigencias programáticas. Estas movilizaciones han provocado el corte de 148 carreteras, autopistas y puentes en todo el país, con más de 80.000 manifestantes. Las principales reivindicaciones se han centrado en la exigencia de más planes de trabajo, un aumento de los subsidios de 150 pesos (50 \$) a 350 (117 \$) y el rechazo del control estatal en la distribución de los planes laborales para los desempleados. Estos, unidos a los empleados del sector público, han ecigido un aumento de salarios para todos los

trabajadores del Estado y de las empresas privadas, y la subida de las pensiones de jubilación. Igualmente importante ha sido que todos los grupos piqueteros protestaran contra las órdenes judiciales que prohíben el corte de calles. Además del bloqueo de calles, se realizó una marcha por la ciudad y protestas ante la sede de Repsol-YPF (la compañía española multinacional de petróleo, propietaria de la antigua compañía petrolífera estatal) que expresaban el rechazo popular a la subida de los precios de los carburantes y exigían “un precio social” para la bombona de gas de uso doméstico. Los asistentes a la marcha se manifestaron también delante de los tribunales federales para protestar por las leyes que prohibían el bloqueo de carreteras. Los cortes, además de en Buenos Aires, se produjeron en las capitales provinciales de Jujuy, Salta, Tucumán, SantaFé, San Juan , Mendoza, Chaco, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chabut y Río Negro. El día de lucha, a principios de mayo, fue el primero desde que los tribunales ilegalizaron los cortes de tráfico. La orden del Ministro de Seguridad de Buenos Aires para “despejar las carreteras” no fue ejecutada habida cuenta de las dimensiones de la manifestación, en la que participaron muchos movimientos piqueteros, entre otros el *Bloque Nacional de Piqueteros*, de orientación troskista, dirigido por los Obreros de Pole, el *Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados*, que dirige Raul Castello y la *Corriente Clasista y Combativa*, formada por antiguos partidarios del régimen de Kirchner. Los sindicatos de empleados públicos se sumaron a la manifestación y a los cortes de carreteras, a pesar de los intentos obstruccionistas del sindicato de la Administración que apoya a Kircher. Durante la tercera semana de mayo de 2004, los sindicatos del metro convocaron una asamblea nacional para lanzar un movimiento que exige una jornada laboral de seis horas al día con el fin de crear puestos de trabajo para los desempleados.

Estas protestas renovadas, promovidas conjuntamente por trabajadores en paro y empleados, se contrarrestan con la pérdida de autonomía y la creciente vulnerabilidad de “las fábricas ocupadas ”. Dos importantes y simbólicas factorías, *Bruckman* (una planta de manufactura de tejidos) y *Grissinopoli* (de producción de pan) han pasado del control de los obreros a la gestión estatal, mientras la fábrica de cerámica Zanón, gestionada por los trabajadores, se enfrenta a la amenaza de un desalojo policial inminente. El movimiento piquetero, a pesar de sus continuas divisiones, todavía conserva una gran capacidad, basada en alianzas tácticas, para convocar y movilizar a decenas de miles de militantes. La renovada actividad está ligada a las organizaciones

de piqueteros que mantienen una percepción de clase independiente del régimen de Kirchner. Los grupos que habían adoptado una actitud de colaboración, crítica o no, se han visto atrapados por el Estado y han llegado a ser incapaces de responder al descontento creciente entre los parados y los obreros mal pagados.

Los primeros 10 meses del reinado de Kirchner han suscitado grandes expectativas entre la gente pero la esperanza en la llegada de tiempos mejores se ha esfumado. El aumento de 50 dólares en los salarios mensuales de los funcionarios y de los pensionistas peor pagados todavía se encuentra por muy por debajo del aumento de los precios de los carburantes, de la energía y de la electricidad que Kirchner, generosamente, ha concedido a las multinacionales privatizadas.

El intento de Kirchner para desarrollar un capitalismo "normal" nacionalista ha puesto de manifiesto su debilidad estructural ante las crisis energéticas, del gas y del sector eléctrico provocadas por las multinacionales de propiedad extranjera. Tras años de beneficios exorbitantes, las multinacionales han llevado a cabo sólo pequeñas o insignificantes inversiones en nuevos oleoductos, infraestructuras o prospecciones para hacer frente a la demanda creciente. En la actualidad, ha descendido la producción en las plantas debido a cierres por razones de "mantenimiento". Las multinacionales han provocado una artificial y grave escasez, responsabilizando de la misma a las leyes gubernamentales. Por si fuera poco, los contratos originales de privatización concedían a las multinacionales el retener el 54 % del petróleo y de gas para disponer de él a su antojo en lucrativas exportaciones a Chile, Uruguay y Brasil, a costa de reducir el suministro a la industria argentina y a los consumidores domésticos. Enfrentado al chantaje de las corporaciones, y después de haberse comprometido con una retórica populista y demagógica al criticar a las multinacionales, Kirchner cedió y toleró la subida de los precios. En una aparente maniobra para pacificar a los nacionalistas, Kirchner ha prometido la creación de una compañía estatal de petróleo que construiría las infraestructuras para facilitar la explotación y la comercialización privadas del petróleo y de la energía.

El "populismo teatral" de Kirchner cada vez tiene menos efecto: los consumidores sufren directamente la bajada real de los ingresos y el rápido y constante incremento de los precios. El resultado neto de la "crisis energética", provocada por las

multinacionales, son los despidos y cierres de fábricas (que aumentan el desempleo y bajan los salarios) y que incrementan el número de hogares empobrecidos que, literalmente, pasan frío. Aunque las organizaciones pragmáticas de piqueteros colaboracionistas han obtenido a corto plazo pequeños beneficios (más planes de trabajo, cargos locales, financiación a pequeña escala), el abrazo de Kirchner a las monopolios privatizados, la continuación del pago de la deuda y las restrictivas políticas presupuestarias a medio plazo han perjudicado a los pobres. Como consecuencia, los “ejes” de la política piquetera se han desplazado desde los líderes “colaboracionistas y pragmáticos”- incapaces de dar respuesta a la crisis energética y de salarios-, hacia dirigentes y organizaciones de piqueteros más combativas y con más conciencia de clase. El capital extranjero, localizado en los sectores estratégicos de la economía, impone las costosas condiciones en las que se tiene que desenvolver el capital nacional. La entrada de divisas fuertes para financiar el capital nacional depende de la volatilidad de los precios de las materias primas. Estos dos factores estructurales impiden cualquier posibilidad de crecimiento sostenido del capitalismo nacional. Si a ello se añade la gran afición del “capital nacional” a transferir sus beneficios al exterior y a invertir en actividades especulativas en Argentina, resulta fácil entender el resurgimiento de la crisis argentina.

La “primera ola de movilizaciones masivas”, que se desarrolló desde enero a julio de 2002, puso en marcha los movimientos piqueteros de masas y la capacidad de los trabajadores desempleados para comprometerse en acciones directas masivas, lo que dio lugar a una cierto grado de conciencia de clase entre centenares de miles de activistas en los barrios más pobres. El reflujo de los movimientos (entre agosto de 2002 y mayo de 2003 coincidió con la concesión de los planes de trabajo de 50 dólares, subvencionados por el régimen, con los conflictos internos entre los grupos piqueteros y con la esperanza de una solución con la elección Kirchner. La profunda marcha atrás que tuvo lugar durante el primer año de la presidencia de Kirchner (junio 2003-abril-2004) se debió al éxito obtenido en la absorción de un sustancial número de líderes piqueteros mediante su incorporación al aparato del Estado, a la financiación de pequeños proyectos y a la adopción de gestos simbólicos. No obstante, el entusiasmo inicial hacia Kirchner está cediendo el paso a las protestas y huelgas. Los empobrecidos trabajadores se han dado cuenta de que los planes de trabajo no han creado verdaderos empleos con salarios que permitan un vida digna; saben también que los proyectos

locales no son la solución de los problemas de los bajos salarios, de la subida de los precios y de la desnutrición de los niños. El descontento empezó a aflorar a principios de marzo de 2004 cuando pequeños contingentes de trabajadores volvieron a cortar carreteras, y tuvieron lugar importantes enfrentamientos en provincias entre los corruptos y autoritarios gobernadores pro-Kirchner y funcionarios, parados y defensores de los derechos humanos. En mayo de 2004, el descontento por el aumento de los precios de la energía autorizado, por Kirchner, la congelación de salarios, el ocultamiento de un 20 % de los planes de trabajo, y el paro abierto, estallaron en acciones callejeras organizadas.

El factor clave es la convergencia temporal y quebradiza de las exigencias de los empleados públicos y privados con bajos salarios, de los consumidores de energía y de los parados. La defección de la “clase media” hacia la derecha (una vez recuperados sus ahorros) que condujo al aislamiento temporal de los piqueteros podría compensarse si se lograra establecer de forma sólida una nueva coalición de trabajadores sindicados y de parados. No hay duda de que Kirchner hará algunas concesiones para dividir la coalición que se está formando, especialmente a través de los dirigentes sindicales bien dispuestos a colaborar. Sin embargo su margen para “dividir y vencer” es limitado debido al fin de los precios favorables de las exportaciones argentinas. No puede contar por más tiempo con el apoyo de los trabajadores con expectativas futuras de un puesto de trabajo y de aumento del nivel de vida, porque el “futuro” ha llegado ya. Las realidades actuales ya no convencen al 50 % de la gente que todavía vive por debajo del umbral de la pobreza. Con la bajada de los precios de las exportaciones de minerales y productos agrícolas argentinos (con excepción del petróleo), Kirchner no dispone de margen de maniobra para pagar la deuda, subir los salarios y crear empleo. En tercer lugar, ha demostrado su disposición para sacrificar el nivel de vida local y el crecimiento, mientras atiende las exigencias de beneficios de las multinacionales energéticas. Finalmente, la cínica representación de Kirchner al “oponerse” al FMI, para transferirle después miles de millones como pago de la deuda, es muy improbable que continúe engañando a la mayoría de los argentinos.

Queda por ver si los movimientos militantes de piqueteros pueden establecer alianzas duraderas con trabajadores en activo, son capaces de profundizar la conciencia de clase

de sus activistas y de crear un movimiento político con amplias bases que articule el todavía profundamente dividido movimiento.

Con el final del mini *boom* en abril-mayo de 2004, y la bajada de los precios de los productos agrícolas para la exportación, Kirchner no dispone ni de los recursos económicos ni de las ideas para mantener sus actuales malabarismos. Además, su negativa a liberar a 4.000 activistas sometidos a procesos judiciales- algunos de los cuales se enfrentan a condenas de 5 a 10 años de prisión por delitos políticos- le coloca en mala situación para encontrar alianzas duraderas. La reaparición de la lucha masiva de clases en Argentina está respaldada por los éxitos conseguidos mediante las acciones directas; se encuentra en situación de enfrentarse a los problemas estructurales (pobreza, paro, bajos salarios) y deberá tener en cuenta sus limitaciones- la ausencia de un partido político nacional de masas que aspire al poder del Estado y a la re-socialización de los sectores estratégicos de la economía. Una vez más los movimientos de masas deberán asimilar que ninguno de los problemas esenciales va a resolverse mediante “alianzas” con la burguesía nacional, ni tan siquiera con la versión moderada de Kirchner.